

**República de Colombia**  
**Rama Judicial del Poder Público**



**Juzgado Diecinueve Civil Municipal**

Bogotá D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**Ref. 2021 01110 00**

**I. OBJETO DE LA DECISIÓN**

Procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponda frente al recurso de reposición formulado por la apoderada del deudor, contra el auto de fecha 22 de julio de 2022 mediante el cual se ordenó devolver las presentes diligencias al Centro de Conciliación Armonía Concertada.

**II. ANTECEDENTES**

1. La recurrente aduce. en lo medular, que el auto en comento debe ser revocado toda vez que el parágrafo del artículo 563 del Código General del Proceso establece que luego del fracaso de la negociación, el conciliador remitirá las actuaciones al juez, quien la decretará de plano la apertura del procedimiento liquidatorio, por lo que, aduce que dicha expresión “*de plano*” indica que como director del proceso no se puede acudir a trámites o controles legales adicionales, así también, expresa que la mencionada decisión perjudica los derechos del deudor y de los acreedores, puesto que, la liquidación patrimonial es el escenario en el cual se reúne nuevamente a los acreedores para que puedan hacer exigible las acreencias debidas.

Igualmente, trae a colación sentencia de la honorable Corte Suprema de Justicia con radicado No. 54564 del 24 de abril del 2013, en la cual se señala, que el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, es un procedimiento que goza de protección constitucional por los derechos que tiene involucrados, por lo que, el legislador previó en el artículo 576 del C.G. del P., “*las normas establecidas en el presente título prevalecerán sobre cualquier otra norma que le sea contraria, incluso las de carácter tributario*”, “*(...) pues le permite al deudor conservar su dignidad y mantener un nivel normal de vida, puesto que, la insolvencia no es justificante de un estado indigno del deudor para toda la vida*”.

Por lo anterior, indica que el auto recurrido impide el acceso efectivo a la administración de justicia, por lo que, menciona que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, en sentencia del 13 de octubre de 2021 expuso: “*Así las cosas, al analizar la decisión en controversia, esta Sala considera que el Tribunal sí incurrió en el error evidente que el promotor indicó en el escrito inaugural, pues nótese que rechazó la demanda de liquidación judicial con fundamento en un argumento que no está previsto en la Ley 1116 de 2006 ni en el artículo 90 del Código General del Proceso, con lo cual pasó por alto que los motivos de rechazo son taxativos y que no puede estar al arbitrio del juzgador la decisión de tramitar o no un proceso judicial cuando se cumplen los requisitos legales para ello*”, es por eso que, menciona que se debe dar apertura de plano, sin imponer cargas procesales o formales al trámite, sin embargo, explicó que si se manifestaron las razones por las cuales el deudor no logró realizar los pagos a los acreedores, no obstante, indicó que el control de legalidad como lo resalta la norma es competencia del centro de conciliación y no como pretende el despacho, por consiguiente, dicho control en este caso ya fue abordado y decidido por el centro de conciliación.

Así también, expresa que el artículo 539 establece una relación completa y actualizada de todos los acreedores en el orden de prelación de créditos que señalan

los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, y en caso de conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo, por lo que, menciona que dicha información no puede constituir un impedimento para acceder al trámite y esa etapa reitera que ya fue agotada por el centro de conciliación, pues indica que si se revisa todas las actas a las audiencias asistieron la totalidad de los acreedores y fueron notificados, en conclusión, se dio cumplimiento al indicar el domicilio de los acreedores a tal punto que todos se hicieron presentes y emitieron votación en el trámite de negociación de deudas.

Además, señalo que las labores de actualización corresponden al liquidador que sea designado una vez se de apertura al proceso, sin embargo, procedió a adjuntar una lista en la cual se indica el numero de placa, la limitación a la propiedad que posee y el nombre de los juzgados que ordenaron dicha limitación, así mismo, respecto al poder manifestó que será aportado por mensaje de datos por el poderdante, para realizar una subsanación y dar cumplimiento a lo solicitado por el despacho, también, en cuanto al domicilio del deudor, manifestó que según el artículo 83 del Código Civil, en Colombia una persona puede tener varios domicilios, como en el presente asunto en el que, la esposa y sus hijos viven un Girardot, sin embargo, sus actividades laborales se encuentran en mayor medida en la ciudad de Bogotá, circunstancia que la ley no prohíbe en ningún acápite.

2. De conformidad con los artículos 110 y 319 del Código General del Proceso se corrió traslado del recurso de reposición a la parte pasiva quien dentro del término no se pronunció al respecto.

### **III. CONSIDERACIONES**

1. Ciertamente es que los medios de impugnación son instrumentos procesales puestos a disposición de las partes, orientados a corregir las posibles equivocaciones que el juez, en su labor de administrar justicia, defina en las decisiones que profiere. Uno de ellos es el recurso de reposición, cuya finalidad es conminar a la misma autoridad que profirió una decisión, para que la estudie nuevamente y determine si hay lugar a revocarla, modificarla, aclararla o adicionarla, teniendo en cuenta si incurrió en una omisión o aplicó indebidamente la ley.

2. En primer lugar, cumple precisar que la liquidación de la persona natural no comerciante es un proceso que se da como resultado del fracaso de las negociaciones de las deudas, debido al vencimiento del tiempo estipulado para el trámite, la declaración de nulidad del acuerdo de pago, o al incumplimiento de dicho acuerdo, así también, es de recordar que el mencionado proceso tiene como propósito proteger los derechos patrimoniales, las prestaciones sociales y las fiscales, entre otras, cuando la situación de la persona natural resulta insostenible.

Así mismo, el proceso de liquidación del patrimonio de la persona natural no comerciante, conlleva la venta de los bienes del deudor, tal como los discriminó en la solicitud de negociación de deudas, con el propósito de cubrir las obligaciones a los distintos acreedores, así las cosas, de conformidad con el inciso 2° del artículo 534 del Código General del Proceso, el Juez Civil Municipal es el competente para conocer del procedimiento de liquidación patrimonial de la referencia, sino fuera porque el Centro de Conciliación y en especial el conciliador designado no cumplió con estricto rigor lo normado en artículo 539 ibidem, pues no verificó el cumplimiento de los requisitos de la solicitud del trámite de negociación de deudas, puesto que, no resulta suficiente la intención de someterse a dicho régimen, pues, es necesario que la información con la cual se estructura la solicitud, se ajuste a los imperativos de orden legal, los cuales son de carácter obligatorio para que el conciliador pueda dar inicio a su labor, de ahí que, la petición debe acompañarse de los soportes y demás documentos que respalden lo allí informado.

La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar a sus comportamientos una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una *“persona correcta”*, para este contexto que nos ocupa el día de hoy, la buena fe presume la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la *“confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”*<sup>1</sup>, por lo que, se debe entender la buena fe en cuanto a la formación y ejecución de las obligaciones, la cual exige ajustar el comportamiento a un modelo de conducta general que se refiere con el correcto y diligente proceder, la lealtad en los tratos, la observancia de la palabra empeñada y el afianzamiento de la confianza suscitada frente a los demás.

Por esta razón, el mencionado deber de conducta debe ser acatado siempre con observancia del interés ajeno, puesto que, quien actúa contrariando el mencionado principio, no encontrara protección jurídica en el momento que decida promover pretensiones que, no obstante, están amparadas de manera formal en el ordenamiento jurídico, contraríen los postulados que propenden por un comportamiento probo y leal frente a su contraparte, así lo dispuso la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al decir que el abuso en el terreno de las negociaciones contractuales *“permite denegar protección jurídica a pretensiones que impliquen el ejercicio en condiciones abusivas de las facultades en que se manifiesta el contenido de situaciones jurídicas individuales activas de carácter patrimonial”*<sup>2</sup>

Por lo anterior, se debe recordar que este trámite es un mecanismo judicial (Art. 534 del C.G.P.), puesto que, dentro del mismo se definirán las diferencias en el que tanto el deudor como sus acreedores habrán de hacerse parte para poner fin a la situación de anormalidad. Esta circunstancia impone que a la liquidación patrimonial le sean aplicables las reglas y principios de todo proceso. Bajo esta premisa le son aplicables las nociones de deberes y cargas procesales.<sup>3</sup>

3. Descendiendo al caso objeto de estudio, se encuentra que si bien el Centro de Conciliación Armonía Concertada, adelantó el trámite previsto en el Título IV, capítulo I y II, artículos 531 a 561 del Código General del Proceso, en virtud de la solicitud presentada por el señor Johan Albeiro Gómez González, este no se encuentra ajustado a derecho y si bien el artículo 563 ibidem, establece que se decretará de plano la apertura del procedimiento liquidatorio, el Juez tiene como deber prevenir, remediar, sancionar, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en cada etapa del proceso, así como, la de adoptar las medidas necesarias para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, por lo que, no es de recibo la afirmación del recurrente en cuanto a que el juez debe inobservar todas las falencias que fueron mencionadas en el auto recurrido, y proceder a la apertura del procedimiento de liquidación patrimonial.

Así las cosas, téngase en cuenta que el numeral 1 del artículo 539 del Código General del Proceso, impone la obligación de indicar de manera precisa las causas que lo llevaron a la situación de cesación de pagos, no obstante, en la documental allegada solo se refiere a una manifestación genérica, en cuanto a que, la situación de insolvencia del señor Johan Albeiro Gómez González se debe a que *“se sobre endeudo, pues le ofrecieron créditos de forma express, intentó invertir en un negocio con un amigo, pero no prospero”*, pero no hizo alusión a una situación fáctica particular que tampoco encuentra respaldo en algún documento que permita ratificar tal circunstancia, puesto que, es nulo el esfuerzo que el deudor al momento de intentar

---

<sup>1</sup> Sentencia T – 475 de 1992

<sup>2</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de octubre de 1994. Expediente 3972, M.P. Carlos Estaban Jaramillo.

<sup>3</sup> Rodríguez Espitia. Régimen de Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante. Universidad Externado de Colombia, 2015.

cumplir con lo dicho anteriormente, no reparo en detallar las razones y circunstancias por las cuales se encuentra en esa situación financiera, faltando de esta forma al deber de lealtad frente a sus acreedores y al estamento jurídico que le brinda la oportunidad de resolver de forma objetiva, sus dificultades financieras.<sup>4</sup>

Igualmente, en lo concerniente a la relación de acreedores que debe contener la solicitud que debe haber la totalidad de los créditos adquiridos, el domicilio de los acreedores, al igual, que las inconsistencias frente a los bienes de propiedad del deudor, se hace evidente el poco o nulo esfuerzo que el deudor realizó al momento de intentar cumplir las anteriores obligaciones.

Así también, respecto del poder aportado por la Abogada Catalina Agudelo Contreras, el cual al momento de la presentación de la solicitud de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante, no cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 5° del Decreto 806 de 2020, de la cual se indica su subsanación en el recurso de reposición presentado, por lo tanto, se recuerda que el auto recurrido analizó y evaluó los documentos presentados al momento de la petición primigenia, por lo que, no es de recibo que en aras de las explicaciones y documentos brindados en la impugnación, se entienda como si desde un principio no existieran irregularidades en la solicitud o en el poder, que el despacho no deba pronunciarse o pasar por alto.

4. En ese orden de ideas, dichas inconsistencias deben ser resueltas ante el Centro de Conciliación Armonía Concertada quien conoció en su inicio el presente trámite, por lo que la providencia se debe mantener incólume.

#### **IV. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **V. RESUELVE**

**PRIMERO: MANTENER INCÓLUME** el auto de fecha 22 de julio de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**Notifíquese**,<sup>5</sup>

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ**  
**JUEZ**

---

<sup>4</sup> García Perdomo, María Mercedes y Marín Martínez. Curso de Formación en Insolvencia de Persona Natural no Comerciante. 6. Derechos y Obligaciones del Deudor y de los Acreedores. Grupo Editorial Ibáñez, 2014.

<sup>5</sup> Esta providencia se notificó por estado No. 91 de 24 de agosto de 2022.

**Firmado Por:**  
**Iris Mildred Gutierrez**  
**Juez Municipal**  
**Juzgado Municipal**  
**Civil 019**  
**Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a89ae8304cf6f6607e9af332f3a4a413afaa8e48dd16eda0c2c644e59e6f9899**

Documento generado en 23/08/2022 06:28:57 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**